

CA de Santiago.

Santiago, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés.

Vistos:

Que en causa RUC N° 2200253303-4, RIT N°5167-2022, seguida ante el DECIMO CUARTO JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO, por sentencia de trece de diciembre de dos mil veintidós, se condenó a MANUEL MARCOS ARELLANO ORTEGA, como autor del delito consumado de conducir un vehículo motorizado en estado de ebriedad, causando daños, delito perpetrado el día 18 de enero de 2022, en la comuna de La Florida, a sufrir en consecuencia las siguientes penas:

I. La pena de cuarenta y un días de prisión en su grado máximo, la cual deberá cumplir a través de la remisión condicional de la misma por el plazo de un año.

II. A la suspensión para cargos públicos mientras dure esta condena.

III. A sufrir una pena de multa de 1 U.T.M., disponiendo de tres cuotas para su pago a partir del mes siguiente a aquel en que quede ejecutoriada firme la presente sentencia, disponiendo hasta el último día hábil de cada mes respectivamente y quedando advertido de la consecuencia de no cumplir.

IV. Le será cancelada su licencia de conducir.

V. Será eximido de pagar las costas de la causa.

VI. No hay días de abono de privación de libertad que reconocerle, toda vez que, como ya se dijo, no ha sido detenido a propósito de esta causa el imputado.

En contra de esta sentencia, la defensora penal pública, doña Erika Vargas Abarca interpuso recurso nulidad según lo previsto en los artículos 372 del Código Procesal Penal, solicitando a esta Corte se acoja lo prescrito en el artículo 385 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 373 letra b) del mismo cuerpo legal, anulando solo la sentencia, para sentencia de reemplazo, imponiendo al condenado la pena que legalmente le correspondería en relación con la cancelación de la licencia para conducir vehículos motorizados y consecuentemente se le condene a la suspensión de su licencia para conducir por el término de cinco años.

Con fecha 7 de febrero pasado, se vio la causa en audiencia a la que concurrieron a alegar el recurrente, y el representante del Ministerio Público fijándose la lectura de sentencia para el día de hoy.

Considerando:

Primero: Que la única causal de nulidad interpuesta por el defensor se funda en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, esto es, “*cuando*



en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”, en relación con el artículo 196 de la Ley 18.290.

Señala que el Ministerio acuso verbalmente al encartado en la audiencia respectiva, por el siguiente hecho: *“El día 18 de enero de 2022, a las 22:10 horas aproximadamente, el imputado Manuel Marcos Arellano Ortega, conducía en estado de ebriedad el vehículo taxi, marca Nissan, color negro con amarillo, placa patente única CXTW-36, por Avenida Departamental en dirección al Oriente, y al llegar a la intersección con Avenida Vicuña Mackenna Poniente, en la comuna de La Florida, pierde el control del vehículo, subiéndose a la acera y chocando con el semáforo existente en el lugar. El imputado es trasladado al Hospital de La Florida para ser atendido donde se le practicó la alcoholemia de rigor, la que arrojó un resultado de 1,48 gramos de alcohol por litro de sangre”*

Agrega el hecho de haber admitido responsabilidad el imputado de acuerdo con lo señalado en el artículo 395 del Código de Procedimiento Penal, la defensa no cuestionó los hechos ni la calificación jurídica, grado de desarrollo ni participación, solamente objeta la suspensión de cancelación de la licencia de conducir fue cuestionada, así como también la rebaja de la multa a 1/3 de UTM y pidió la concesión de la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena más la exención de las costas.

Finalmente, la sentenciadora condenó al encartado a la pena de 41 días de prisión en su grado máximo, Multa de 1 UTM, accesorias legales, cancelación de la licencia de conducir, sin costas. Se le concedió la pena sustitutiva de Remisión Condicional por el plazo de 1 año. Se le concedieron 3 cuotas iguales, mensuales y sucesivas para el pago de la Multa, pagaderas hasta el último día hábil del mes siguiente al que quede ejecutoriada la sentencia impugnada.

Señala, que la errónea aplicación del derecho en la sentencia recurrida dice relación con que el tribunal del fondo, interpretando erradamente la norma del artículo 196 inciso 1° de la ley 18.290 (Ley del Transito) y la locución *“al ser sorprendido en una tercera ocasión”*, por cuanto señala que si bien el condenado en estos autos mantiene dos condenas anteriores por conducción en estado de ebriedad; una de ellas, es del año 2004, la que a juicio de la defensa y por estricta aplicación del principio de irretroactividad de la ley penal, NO debió ser considerada para los efectos de establecer la cancelación de la licencia, por cuanto el inciso primero del artículo 196 de la ley 18.290 tiene su redacción actual fijado por la modificación introducida a la citada ley N° 18.290 por la ley N° 20.580, publicada en el Diario Oficial de quince de marzo de dos mil doce. En efecto, el encartado fue condenado por conducción en estado de ebriedad por sentencia de



fecha 20 de mayo de 2004, del 23° Juzgado del Crimen de Santiago, en causa ROL 202-2003 y por conducción en estado de ebriedad por sentencia de fecha 18 de marzo de 2015, del 14° Juzgado de Garantía, en causa RIT 1320-2015. Agrega la recurrente que el tribunal del fondo resuelve acogiendo la solicitud del Ministerio Público cancelando la licencia de conducir del condenado; considerando que se trata de tres ocasiones en que el encartado ha sido condenado por conducir en estado de ebriedad, configurándose el presupuesto para la cancelación de la licencia, pese a que la primera condena es de fecha muy anterior a la dictación de la ley 20.580 que modificó en los términos expresados el artículo 196 de la Ley del Tránsito.

En cuanto a los fundamentos de derecho, indica la recurrente que el tribuna a quo ha incurrido en un error de derecho al decretar la cancelación de la licencia de conducir, por cuanto el inciso primero del artículo 196 de la ley 18.290 tiene su redacción actual fijado por la modificación introducida a la citada ley N° 18.290 por la ley N° 20.580, publicada en el Diario Oficial de quince de marzo de dos mil doce. Esto implica conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del texto punitivo, que la ley penal rige hacia el futuro y no puede tener efectos retroactivos, lo que significa que el agravamiento de la pena accesoria únicamente puede darse cuando se ha conducido un vehículo motorizado por primera, segunda y tercera vez, con posterioridad a la entrada en vigencia de la modificación legal, esto es, desde la publicación en el Diario Oficial antes referida. De esta forma, la primera condena por conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad del año 2004, que pesa sobre el encartado, lo fue con una fecha anterior a la entrada en vigencia de la modificación aludida precedentemente. En efecto, señala que el artículo 18 del Código Penal, al señalar que *“ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración”*, norma que es reconocida por constituir una Garantía Constitucional, conforme lo establece el artículo 19 N°3 de la C.P.E. y conforme a la irretroactividad de la ley penal, como garantía constitucional reconocida como tal, solamente podrían estimarse como válidas las infracciones cometidas con posterioridad a la publicación de la Ley 20.580 y no las anteriores como ocurre en la presente sentencia, como tampoco el legislador en la Ley 18.290 con sus últimas modificaciones, específicamente, en ningún inciso del modificado artículo 196 se indica expresamente la imprescriptibilidad de las penas pretéritas, y ésta debe ser expresa, por consiguiente existe una transgresión del artículo 104 del Código Penal. Por ende, agrega la recurrente, este error en la interpretación que hizo el tribunal a quo en su sentencia al imponer la cancelación de la licencia de conducir y no la suspensión de la licencia por cinco años como lo pidió la defensa, implica



la errada aplicación del artículo 196 inc. 1° de la ley 18.290 al haberse considerado la condena del año 2004.

La recurrente funda sus alegaciones en jurisprudencia citada en su recurso, (Causa Rol 4972-2021 de la Corte de Apelaciones de Santiago; rol 2783-2016 de la Corte de Apelaciones de San Miguel; causa rol 2914-2017 de la Corte de Apelaciones de San Miguel; causa rol 1805-2014 de la Corte de Apelaciones de Santiago), sentencias todas que acogen los recursos de nulidad interpuestos en dichos procesos.

Considera la recurrente que la sentencia impugnada comete el error de derecho –que influye en lo dispositivo del fallo. al considerar erróneamente la sentencia del año 2004 en contra del condenado, como un elemento constitutivo para cancelar su licencia de conducir, enfatizando que, de no haberse considerado dicho elemento, de acuerdo a las reglas de la irretroactividad de la ley penal, se habría decretado la suspensión de la licencia de conducir por un período de cinco años.

Segundo: Que, en primer lugar, es necesario tener presente que el recurso de nulidad es de derecho estricto y procede, en consecuencia, en virtud de las causales y los fines establecidos en forma expresa por la ley, por ende, no conforma una instancia diversa que permita revisar los hechos que se han dado por establecidos en el juicio.

Así, el recurso de nulidad tiene como finalidad verificar la correcta aplicación de las normas legales, de manera que una vez establecidos los hechos y analizados los antecedentes de la causa, la calificación jurídica resulte justa y la pena a aplicar al sentenciado sea la que corresponde al ilícito investigado.

Tercero: Que, no existe controversia respecto del hecho constatados en autos, cual es *“El día 18 de enero de 2022, a las 22:10 horas aproximadamente, el imputado Manuel Marcos Arellano Ortega, conducía en estado de ebriedad el vehículo taxi, marca Nissan, color negro con amarillo, placa patente única CXTW-36, por Avenida Departamental en dirección al Oriente, y al llegar a la intersección con Avenida Vicuña Mackenna Poniente, en la comuna de La Florida, pierde el control del vehículo, subiéndose a la acera y chocando con el semáforo existente en el lugar. El imputado es trasladado al Hospital de La Florida para ser atendido donde se le practicó la alcoholemia de rigor, la que arrojó un resultado de 1,48 gramos de alcohol por litro de sangre”*; reconociendo la defensa tanto los hechos imputados como el grado de desarrollo, esto es la conducción en estado de ebriedad.



Cuarto: Que, así las cosas, lo medular en este caso es determinar si puede considerarse todas las condenas pretéritas por el mismo delito a efectos de aplicar la pena accesoria de cancelación de la licencia de conducir.

Sobre la materia, es preciso consignar que el artículo 196 de la Ley del Tránsito dispone expresamente (en su texto actualmente vigente), en lo pertinente dispone respecto de la suspensión o cancelación de la licencia de conducir: *“además de la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por el término de dos años, si fuese sorprendido en una primera ocasión, la suspensión por el término de cinco años, si es sorprendido en un segundo evento y, finalmente, con la cancelación de la licencia al ser sorprendido en una tercera ocasión, ya sea que no se ocasione daño alguno, o que con ello se causen daños materiales o lesiones leves.”*

A estos efectos, es dable consignar que el artículo 196 de la Ley de Tránsito, tanto en su versión anterior a la modificación introducida por la ley N° 20.580, como de su actual redacción y, asimismo, del estudio de las actas de la historia modificatoria, tiene por objeto endurecer el tratamiento aplicable al conductor que sea sorprendido conduciendo un vehículo en estado de ebriedad en más de una oportunidad; con la clara finalidad de incentivar un manejo responsable frente al incremento de conductas transgresoras que es causante principal de los accidentes de tránsito ocurridos en Chile, muchos de ellos con desenlaces fatales que implican la ocurrencia de muchas muertes evitables. De esta manera, el legislador persigue la aplicación de un tratamiento más drástico para el conductor ebrio que ya se ha encontrado con anterioridad en una o más situaciones similares. Esto se materializa en la terminología empleada por la ley para imponer la pena accesoria relacionada con la licencia de conducir. En efecto, el actual artículo 196 emplea el vocablo “evento”, a diferencia de la norma antigua que usaba el vocablo “reincidencia”. Ambas palabras tienen definiciones diferentes, lo que deriva también en consecuencias jurídicas diferentes. Así, el “evento” es definido por el Diccionario de la RAE como “acaecimiento”, es decir, cosa que se sucede, asunto diferente a la reincidencia en el delito que exigía la antigua disposición para elevar la suspensión de la licencia para conducir. En efecto ahora solo se requiere ser sorprendido en un segundo evento para elevar el tiempo de suspensión de la licencia de conducir, y en caso de ser sorprendido en una tercera ocasión, se le sanciona con la cancelación de la licencia, criterio que ha sido sustentado por esta Corte (ver considerando 5° de la sentencia de la Corte de Apelaciones causa rol 1291-2016, Corte de Apelaciones de Santiago).

Así las cosas, decretar la cancelación de la licencia de conducir no configura incumplimiento de la normativa sobre irretroactividad de la ley penal



contemplada en los artículos 18 del Código Penal y 19 N° 3 de la Constitución,
“porque lo que establecen tales textos normativos es el principio general de irretroactividad de la ley penal, que se traduce en que ningún delito puede castigarse con otra pena que la que señale una ley “promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que la nueva ley favorezca al afectado”. (ver Revista de Ciencias Penales Sexta Época, Vol. XLIV, N° 2 (2017), Páginas 309 – 320).

Una ley es retroactiva cuando rige hechos, actos o situaciones anteriores a su vigencia, razón por la cual la irretroactividad de la ley, tanto en materias civiles como penales, se consagra en nuestro ordenamiento jurídico como principio general. Este principio de irretroactividad de la ley es un mecanismo que resguarda la seguridad jurídica genérica, máxime en materia penal, teniendo por finalidad inmediata que los sujetos sometidos por las normas legales conozcan, o al menos tengan la posibilidad de conocer, las conductas que les están permitidas y las que les están prohibidas; junto a los principios de inexcusabilidad del cumplimiento del derecho y de prefiguración de lo lícito e ilícito.

Teniendo en consideración la regulación de la Ley de Tránsito anterior a la reforma efectuada por la ley N° 20.580 y especialmente tomando en cuenta el extracto de filiación del condenado, el tribunal podía imponer la cancelación de la licencia de conductor, puesto que, en efecto, incluso en conformidad con la legislación anterior, el juez debía decretar tal cancelación si estimaba que la conducción de vehículos por parte del infractor ofrecía peligro para el tránsito o para la seguridad pública

De lo anterior se desprende que no es posible admitir la interpretación propuesta por la recurrente, ya que a partir de la actual redacción del artículo 196 en comento, deben ser consideradas para aplicar la pena de cancelación de licencia - establecida para el caso en que exista reiteración de la conducta antijurídica - las condenas tanto anteriores como posteriores a la reforma. No puede fundarse la tesis contraria (esgrimida por la recurrente) en la irretroactividad de la ley penal o el principio pro reo; ya que la momento de la comisión del delito de autos, ya estaba vigente el artículo 196 en su actual redacción, por lo que el condenado sabía que si era sorprendido en tres ocasiones conduciendo en estado de ebriedad se aplicaría la pena accesoria impugnada.

Así, el empleo por el legislador de la expresión “ocasión” implica simplificar la aplicación de la agravante en cuanto a que, para su concurrencia, sólo exige haber conducido en estado de ebriedad en tres “ocasiones” para cancelarse su licencia, (lo que obviamente no significa una simple imputación pero sí haber sido condenado mediante sentencia firme y ejecutoriada que declare la existencia de hecho constitutivo del delito de conducción en estado de ebriedad).



Por su parte, es forzoso reconocer que el supuesto fáctico para haber sido condenado con anterioridad supone el “evento” o ser “sorprendido” o en “ocasión” de conducir en estado de ebriedad. De esta manera, la interpretación, hecha por el tribunal de a quo es correcta, al considerar las dos condenas anteriores firmes y ejecutoriadas del acusado por el mismo delito, las cuales están subsumidas en la expresión “ocasión” que expresa el legislador (en idéntico sentido, los considerandos 7º y 8º de la sentencia de la Corte de Apelaciones ya citada).

Así, esta Corte comparte los argumentos vertidos por el Ministerio Público en cuanto a la aplicación de la norma y expresado en la sentencia impugnada. *“En este caso, es posible advertir del debate, que esta es la tercera oportunidad en que el imputado es encontrado conduciendo en estado de ebriedad, en este tribunal el tema que usualmente suele hacerse es el que dice relación con la irretroactividad de la ley penal, pero esto ya ha sido resuelto también de manera reiterada por el Tribunal Constitucional, a propósito de la aplicación de esta norma y es el razonamiento que comparte también este juez, creo que no se trata de una retroactividad de la ley penal, sino que creo que se trata de ser más exigente o establecer un mayor reproche penal en esta figura de la conducción en estado de ebriedad”*

Quinto: Que, tal cómo se advierte, y contrariamente a lo sostenido por la recurrente, la aplicación del artículo 196 de la Ley del Tránsito se ha aplicado correctamente, ya que es un hecho pacífico en la causa que esta es la tercera condena por conducir en estado de ebriedad del acusado, lo que configura el supuesto descrito en la ley como “tres ocasiones”.

Sexto: Que, de lo anterior, se colige que la pretensión de la defensa del condenado no puede prosperar, toda vez que se desvía bastante a las definiciones que la dogmática y jurisprudencia han establecido para la aplicación del artículo 196 de la Ley del Tránsito respecto de conductores que hayan tenido tres o más eventos de conducción en estado de ebriedad, que dispone que además de las penas corporales indicadas, se debe cancelar la licencia de conducir del afectado. En efecto, según se lee de la sentencia se expresan los antecedentes que permitieron acreditar tanto el hecho como la participación y las razones para la determinación de la pena, junto a la acreditación de las tres ocasiones en que ha sido sorprendido conduciendo en estado de ebriedad y del claro tenor de la norma del artículo 196 de la Ley del Tránsito ya referido se observa que el sentenciador no ha errado en la aplicación del derecho, razón por lo cual el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones, citas legales y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 372 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el



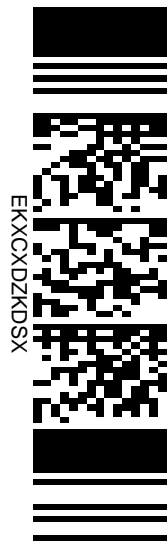
recurso de nulidad interpuesto por la defensora penal doña Erika Vargas Abarca, en representación de MANUEL MARCOS ARELLANO ORTEGA, en contra de la sentencia de fecha trece de diciembre de dos mil veintidós, dictada por el Décimo Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago, en causa RUC N° 2200253303-4, RIT N°5167-2022, en consecuencia, ella no es nula.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la abogada integrante Bárbara Vidaurre Miller.

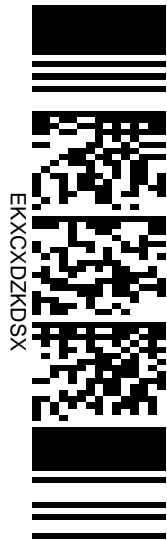
Rol N° 5798-2022-Penal.

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firman la ministra (S) señora Villegas ni la Fiscal Judicial señora Hernández, por ausencia.



Proveído por la Presidenta de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.